ENSAYO SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA EN MÉXICO (Función de las Fuerzas Armadas en el Sistema Político Mexicano)

Luis J. Molina Piñeiro

Sumario: I. Exigencias democráticas; II. Tesis democráticas básicas; III. Estabilidad y democracia; IV. Violencia, estabilidad y legitimidad en México; V. Las fuerzas armadas y la estabilidad política; VI. Las Fuerzas Armadas como coadyuvantes del Ministerio Público; VII. Hipótesis y reflexiones sobre la estabilidad en el futuro inmediato (1995).

I. EXIGENCIAS DEMOCRÁTICAS

Tras el reconocimiento de los gobiernos socialistas-comunistas de su fracaso por implantar un sistema económico-social igualitario, materialmente justo, simbolizados con la caída del Muro de Berlín en 1989, y la rápida desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la legitimidad de un sistema político se da en la medida en que se identifique con el régimen constitucional democrático liberal y su práctica electoral pluripartidista.

La vigencia del pensamiento democrático-liberal-social es tal que a nivel internacional un Estado no puede considerarse civilizado si no satisface cuatro exigencias:

1. La primera se refiere a la vigencia social de los derechos humanos, cuyo respeto debe ser límite de todo quehacer individual y colectivo (Derecho Civil, Derecho Penal, etcétera), y en su dimensión de

garantías individuales deben ser preservados y respetados en y por las acciones de los órganos del Gobierno del Estado. (C.P. ¹, artículo 102, apartado B).

2. La segunda se relaciona con la democracia electoral basada en el dualismo o multipartidismo² político y su lucha por el poder en procesos electorales regidos por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo; y juzgados por tribunales autónomos. (C.P. artículo 41).

3. La tercera se presenta en la posibilidad viable y efectiva de las personas, grupos, clases, sectores y estratos sociales por lograr una forma de vida digna, acorde a un equilibrio entre la justicia distributiva y la libertad, como lo dispone formalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros, en los artículos referentes a :

- la educación, 3°;
- la familia, la salud, la vivienda y los menores, 4°;
- la función social de la propiedad, 27, especialmente antes de las reformas de 1992; y
- el derecho al trabajo digno, regulando los derechos individuales y colectivos del trabajo, 123; y

4. La cuarta se refiere a que en el orden jurídico se definan con precisión los derechos y limitaciones de la propiedad y de los propietarios.

¹ Aclaración general: Las siglas C.P. significan Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Ley Fundamental.

² Duverger, Maurice, **Los Partidos Políticos**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1969, pp.234 a 307.

II. TESIS DEMOCRÁTICAS BÁSICAS

1. En la democracia, la soberanía reside en el pueblo (C.P. artículo 39). El que manifiesta su voluntad al determinar la forma de gobierno en el orden constitucional (C.P. artículos 40; 41, párrafo primero y 49).

Lo que la vincula históricamente al estado de derecho constitucional escrito (Constitución de los Estados Unidos de América, 1787; Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Asamblea Nacional Francesa de 1789).

2. La voluntad del pueblo se identifica con la voluntad general, entendida como la aplicación de la razón ³ a la organización y el funcionamiento del Gobierno.

3. Desde los siglos XVIII y XIX, la democracia se entendió como una forma de gobierno creada artificialmente, basada en la libertad y sustentada en la propiedad, cuyos destinatarios eran los particulares.

4. La organización y el funcionamiento de las autoridades del Gobierno se describió en ámbitos de jurisdicción y competencia definidos con precisión en la ley ⁴.

5. La organización y el funcionamiento de la sociedad, así como el cambio de la misma, sobre todo el de los fenómenos económicos, se consideraron sujetos a principios causales semejantes a los que rigen el mundo de la naturaleza.

6. Los intereses particulares que protegió el derecho dio a sus titulares la certeza y la seguridad de recurrir a un juez competente para

³ Rousseau, Juan Jacobo, **Ilustración, El Contrato Social**, Ed. Taurus, Madrid, 1966, p.31 y ss.

⁴ Lowenstein, Karl, **Teoría de la Constitución**, Ed. Ariel, Barcelona, 1964, p.149.

que los protegiese, en casos extremos, mediante la aplicación de la fuerza coercitiva monopolizada por el Gobierno del Estado ⁵.

7. El Sistema Político definió las distinciones entre el Derecho Público y el Privado, basado este último en la propiedad, concepción material generadora de derechos reales, comprendida «... como el señorío jurídico absoluto sobre una cosa» ⁶. Concepto de propiedad que había probado su eficacia en la regulación mediante el contrato y el convenio, de las relaciones sociales y económicas desde el siglo VI con la publicación del **Corpus Juris**, de Justiniano.

8. La crítica socialista consideró al Derecho Constitucional Democrático-Liberal como una legalización injusta (material) de los intereses del capitalismo burgués, mercantil e industrial ⁷.

9. Después de la Segunda Guerra Mundial las democracias acentuaron su carácter social y en su afán por generar y fortalecer el estado de bienestar, trataron de «desideologizar» y despolitizar la función del gobierno y del poder ⁸, al considerar que éste tiene como finalidad prioritaria lograr la igualdad social ⁹ mediante el derecho al trabajo equitativamente remunerado en los términos de las leyes y los contratos laborales, que regulan el papel que el trabajador juega dentro del sistema de producción, mismo que condiciona su posición en la estructura socioeconómica y sociocultural ¹⁰.

⁵ Burgoa, Ignacio, **Derecho Constitucional**, Ed. Porrúa, 1991, p.575 y ss.

⁶ Sohn, Rodolfo, **Instituciones de Derecho Romano Privado**, Editorial Gráfica Panamericana, México, 1951, p. 157.

⁷ Saint-Simon, Henri de, **El Sistema Industrial**, Ediciones de la Revista del Trabajo, Madrid, p.15 y ss. Kropotkine, Pedro, **La Conquista del Pan**, Ed. Maucci Hermanos, México, s/f, pp.5-12. Marx, Karl y Federico Engels, **Manifiesto del Partido Comunista**, ed. Progreso, Moscú, s/f, p.28. Lenin, **El Estado y la Revolución**, Ed. Ediciones de Lenguas Extranjeras, Moscú, 1947, p.20.

⁸ Popper, Karl, **La Sociedad Abierta y sus Enemigos**, Ed. Paidós, Tomo II, pp.254-263.

⁹ Duverger, Maurice, **Sociología de la Política**, Ed. Ariel, Madrid, 1983, p.223 y ss. (Movilidad Social y Clases).

¹⁰ Lautmann, Rüdiger, **Sociología y Jurisprudencia**, Ed. Sur, Buenos Aires, 1974, p.97.

10. El ascenso social tiene como base el esfuerzo personal y el talento cultivado; en esta preparación y capacitación para el trabajo juegan un papel relevante los sistemas formales e informales de enseñanza, que en buena medida han legitimado jurídica y socialmente las desigualdades ¹¹.

11. En estas sociedades la movilidad y el cambio social son producto de la modificación del sentido de las conductas ¹² en estratos y sectores importantes de las mismas, producto de la transformación y adecuación de las prioridades de toda índole, lo que necesariamente genera conflictos de intereses.

12. Las sociedades democráticas industriales ricas, sobre todo las europeas, por estar densamente integradas, temen a los conflictos de intereses; por ello, los grupos dirigentes adoptan como una política prioritaria el resolverlos, particularizándolos, midiéndolos y cuantificándolos para plantear soluciones realistas en su racionalización-anticipación, la cual se formaliza en preceptos legales ¹³ y en instituciones derivadas de las normas generales, como son el contrato y el convenio que especifican y fortalecen la bilateralidad y la función de los órganos, coactivos en su caso.

13. Esta concepción de la democracia en su pretensión científica tecnológica, llega a considerar la posibilidad de planear los conflictos futuros, producto de la dinámica social, para resolverlos desde ahora con preceptos e instrumentos jurídicos ¹⁴.

14. En este contexto de particularización de los conflictos, de su racionalización y planeación, se parte de una serie de supuestos,

¹¹ Dahrendorf, Ralf, **Las Clases Sociales y su Conflicto en la Sociedad Industrial**, Ed. Rialp, 1962, pp.61-100.

¹² Weber, Max, **Economía y sociedad**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, pp.5-18.

¹³ Luhmann, Niclas, **Sistemas Sociales**, Ed. Universidad Iberoamericana y Alianza Editorial, México, 1991, p.375 y ss.

¹⁴ Schelski, Helmut, **El hombre en la Civilización Científica y Otros Ensayos**, Ed. Sur, Buenos Aires, 1967, 1967.

como son, entre otros: considerar que hay recursos económicos materiales suficientes para viabilizar su solución; que existe la vigencia social del orden jurídico y el respeto de las partes a lo pactado; y que se da un substrato científico tecnológico en el análisis de los problemas y conflictos sociales¹⁵. Recordemos que la sociedad industrial es en buena medida el resultado de la aplicación al proceso económico de los conocimientos científicos exactos y de la naturaleza.

15. Lo jurídico se entiende, en alguna medida, como la formalización de la concertación de voluntades expresadas en diálogos tolerantes, responsables, libres y conscientes entre las partes involucradas, y entre éstas y el Gobierno, como sector en su caso (Pactos Económicos, México 1987-1995). Concertación que tiende al perfeccionamiento de los preceptos jurídicos, nunca a su negociación y menos a que la autoridad competente autorice su transgresión temporal.

16. La concertación gremial condensada¹⁶ como medio idóneo para la solución de las controversias económicas mediante pactos ha ampliado sus espacios al incorporar al gobierno como un sector más en las negociaciones, que junto con el empresarial, el sindical y el agropecuario, acuerdan soluciones, encargando su cumplimiento a un órgano de seguimiento autocreado, cuyas resoluciones son obligatorias aunque no coactivas. La concertación y el consenso son considerados como un estadio superior de la democracia liberal-social-moderna en la solución de los conflictos, particularizando las normas en pactos y sustituyendo la coacción judicial (jurisdiccional) larga y costosa con mecanismos vinculatorios, informales pero eficaces.

17. Postulados prioritarios de estas teorías son: la definición cierta y precisa del derecho de propiedad y los derechos de los propietarios; la delimitación clara de los ámbitos de competencia y jurisdicción de

¹⁵ Habermas, Jürgen, **Teoría y Praxis**, Ed. Sur, Buenos Aires, 1966, p.154 y ss. (A propósito de la autorreflexión de la fe racionalista).

¹⁶ Dos Santos, Mario, compilador, **Concertación Político Social**, Ed. Clacso, Buenos Aires, 1987.

las autoridades, el respeto de la sociedad al Derecho, la participación responsable y consciente de los sectores, estratos sociales, grupos e individuos por respetar lo pactado y para vivificar y activar el Derecho.

18. En estas teorías democráticas, realidad y derecho ¹⁷ forman parte de un mismo proceso en el que las normas tienen como función mantener el orden social y la estabilidad política; pero también determinar en planes y programas de gobierno hechos leyes, el cambio y el futuro de la sociedad.

19. A tal grado el libre juego de los partidos políticos ¹⁸ en la toma del poder ocupa hoy un espacio importante en la discusión democrática que hay quienes consideran que ésta no se da si en la contienda electoral no existe la posibilidad efectiva de que por lo menos dos de los partidos contendientes puedan llegar al gobierno. Es decir, se entiende a la democracia como el gobierno de la mayoría que con el cambio republicano puede pasar a ser minoría.

20. Esto es posible porque el número de factores de poder, fuerzas y sectores, así como de militantes activos y electores que apoyan al partido en el gobierno es semejante al del partido de oposición más importante, siendo el comportamiento electoral inmediato y circunstancial de los ciudadanos o las alianzas y coaliciones de los partidos los que determinan la mayoría y, con ello, el triunfo ¹⁹.

21. A los partidos de oposición no sólo se les pone en condición de igualdad frente al del gobierno en los procesos electorales, sino que se les da una posición de ventaja, sobre todo cuando los calendarios electorales, por causas fortuitas, se relacionan con otros hechos de

¹⁷ Bobbio, Norberto, «El Poder y el Derecho», en **Origen y Fundamentos del Poder Político**, Ed. Grijalbo, México, 1985, p.21 y ss.

¹⁸ Michels, Robert, **Los Partidos Políticos** (2 volúmenes), Ed. Amorrotú, Buenos Aires, 1969; Duverger, Maurice, **Los Partidos Políticos**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p.71 y ss.

¹⁹ Deutsch, Karl, **Política y Gobierno**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p.71 y ss.

trascendencia social, como pueden ser las crisis económicas, o causas y factores externos, como sucedió con el desplome de los gobiernos de los partidos comunistas en la Europa del Este.

22. La lucha ideológica ha menguado ²⁰, vinculándose cada día más la democracia representativa a los estatutos, los programas de acción y las plataformas electorales de los partidos, así como a los procesos de selección y promoción de sus candidatos.

III. ESTABILIDAD Y DEMOCRACIA

1. Los sistemas políticos *estables* tienen características que los identifican (reglas de identidad) y una que los reconocen (regla de reconocimiento). Esta última se refiere a la disposición y/o propósito del gobierno para cumplir (objetivizar) con la Constitución democrática (legitimidad) a través del actuar de los gobernantes, factores formales de poder, determinado en ámbitos de competencia y jurisdicción (Estado de Derecho). Las primeras se refieren a la creencia, de quienes gobiernan, que el ejercicio del poder es un medio para lograr fines y valores; y a la obediencia de los mandatos por los gobernados:

- a) No por temor o miedo a las sanciones, o
- b) por prudencia frente a quienes mandan, sino
- c) convencidos del contenido ético de los mandatos que obedecen ²¹.

2. Quienes gobiernan lo hacen creyendo y convencidos de que el poder formal que ejercen y el contenido de sus mandatos (actos de gobierno) son buenos, valiosos y/o positivos, lo que implica criterios normativos y de jerarquización valorativa –estimativa o

²⁰ Sartori, Giovanni, **Qué es la Democracia?**, Ed. Tribunal Federal Electoral e Instituto Federal Electoral, México, 1993, p.255.

²¹ Garzón Valdés, Ernesto, **El concepto de Estabilidad de los Sistemas Políticos**, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, p.11 y ss.

axiología jurídica—²²; los gobernados, por su parte, mediante su aceptación o aquiescencia manifiestan que la forma de gobernar de los gobernantes y el contenido de los mandatos son buenos y/o positivos. La máxima sería: ¡Se obedece no sólo por estar obligado sino por sentirse obligado!²³.

3. Las reglas de identidad y la de reconocimiento democráticas no tratan de una relación idílica donde gobernantes y gobernados no tienen discusiones o disputas. En la democracia pluripartidista los gobernantes son los triunfadores de los procesos electorales que dan agilidad al sistema político y que tuvieron su origen en el enfrentamiento de ideologías, programas, plataformas electorales y candidatos. Discusiones políticas sobre las técnicas y los medios para la solución de los conflictos de intereses de todo tipo que se dan en la sociedad y que deben resolverse racionalizándolos en preceptos o en instrumentos legales. Los programas, los planes y las plataformas electorales triunfantes son sancionados por el voto ciudadano de la mayoría-minoría, dándole pluralidad y *estabilidad* al sistema.

4. El cambio social y los conflictos que lo generan se consideran parte natural del orden social²⁴; el proceso de cambio se da dentro del sistema cuando sus reglas de identidad y reconocimiento no se rompen, manteniendo la *estabilidad*. Este tipo de cambio normalmente implica la transformación de las leyes de acuerdo al procedimiento previsto en el mismo orden constitucional (C.P. artículo 135).

5. Se trata de cambios que explican la transformación de las prioridades de los intereses que se dan en los distintos subsistemas sociales –económico, sociocultural-histórico, político-real, político-

²² Recaséns Siches, Luis, **Antología 1922-1974**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p.357.

²³ Weber, Max, **Economía y Sociedad**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1964 p.173; Heller, Hermann, **Teoría del Estado**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1968, p.201.

²⁴ Dahrendorf, Ralf, **Las Clases Sociales y su Conflicto en las Sociedades Industriales**, Ed. Rialp, p.255.

formal, jurídico, ideológico, etcétera—²⁵, y que no pretenden trastocarlos; mientras más pausados y rítmicos (intrasistema) sean, inocuan y propician el desarrollo del sistema²⁶, preservando su *estabilidad*.

6. En los sistemas políticos de países con fallas estructurales y rezagos históricos de desigualdades económicas, sociales y políticas se presentan casos límites para su permanencia y *estabilidad*:

a) Cuando frente a la solución de los conflictos los distintos grupos gobernantes, propios de la democracia, presentan contradicciones internas irreconciliables, y

b) Cuando los mecanismos de control político son incapaces e ineficaces para solucionar y/o controlar los conflictos²⁷, generando frustraciones sociales y propiciando la acción de los órganos de imposición del orden represivo que pueden recrudecerse y ampliarse frente a agresiones directas, como son:

1. los levantamientos armados²⁸, y
2. Los crímenes políticos²⁹.

Frente a estas situaciones un sistema *estable* tiene que o debe ser capaz de racionalizarlos en documentos y/o instrumentos jurídicos de contenido *ad hoc* (Pactos); o de perseguirlos y castigarlos con la intervención efectiva de sus órganos de procuración (persecución de delitos) y administración de justicia.

²⁵ Molina Piñeiro, Luis J., **Aportes para una Teoría del Gobierno Mexicano**, Ed. UNAM p.25.
²⁶ Easton, David, «Categorías para el Análisis Sistémico de la Política», en **Enfoques Sobre Teoría Política**, Ed. Amorrortú, Buenos Aires, Argentina, 1969, p.224.
²⁷ Coser, Lewis, **Nuevos Aportes a la Teoría del Conflicto Social**, Ed. Amorrortú, Buenos Aires, Argentina, 1970, p.94. (Funciones de la violencia como conflicto social).
²⁸ En este contexto puede meditar sobre el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional –EZLN–, en los Altos y periferia de la Selva de Chiapas, en enero de 1994.
²⁹ En este contexto puede meditar sobre el asesinato, el 23 de marzo de 1994, de Luis Donaldo Colosio, candidato, del Partido Revolucionario Institucional –PRI–, a la Presidencia de la República y virtual triunfador de las elecciones del 21 de agosto de 1994. Y el de José Francisco Ruiz Massieu, asesinado, el 28 de septiembre de 1994, siendo Secretario General del PRI y seguro líder de la fracción priísta de la Cámara de Diputados de la LVI Legislatura al Congreso de la Unión.

7. En las situaciones límite lo que está en juego es la identidad y el reconocimiento de las reglas del sistema y con ello su *estabilidad* que incluye:

- a) los órganos de gobierno;
- b) Los gobernantes; y
- c) Las organizaciones y partidos políticos.

8. La *estabilidad* de un sistema político es un tema que ha sido discutido desde los orígenes del pensamiento occidental, y se vincula a su legitimidad y a su proceso de legitimación permanente. Se considera a un sistema como legítimo cuando sus reglas de identidad y de reconocimiento se pueden equiparar con los principios y prácticas jurídicas de la democracia liberal-social de participación pluripartidista y alternancia viable en el gobierno, vía procesos electorales limpios para el cambio republicano.

9. Los sistemas políticos que no respetan a los derechos humanos; que no han logrado implementar procesos electorales inobjektivos; o donde no hay igualdad social de oportunidades para la vida digna de sus habitantes no pueden ser calificados como legítimos. Con estos criterios estrictos pocos serían los sistemas que obtendrían dicha calificación.

10. Un gobierno (poder formal) como parte de un sistema político no puede ser considerado legítimo:

- a) Si es incapaz de garantizar a sus gobernados los derechos humanos (Garantías) consagrados en la Constitución;
- b) Si no tiene la voluntad manifiesta de encontrar en el voto popular el origen de su representatividad, y
- c) Si no es capaz de lograr la igualdad económica y la movilidad social reales de sus habitantes mediante la eficacia y vigencia de una legislación laboral amplia; lo que es difícil de lograrse en países pobres con lastres económicos-sociales-culturales de siglos.

11. Estos modelos teóricos, al cruzarse con las realidades, aun con las de los países más ricos, presentan deformaciones, limitaciones y/o alteraciones, recordemos:

- a) Las manifestaciones de discriminación racial abiertas en los países altamente industrializados, como el referéndum transpersonalista de la iniciativa de ley 187 contra los inmigrantes ilegales en California, USA, 1994³⁰;
- b) Las contradicciones entre el derecho a la información y los intereses de los medios de comunicación (un ejemplo es el llamado Diálogo Norte-Sur); y
- c) Las desigualdades, aun ante la ley, de los derechos difusos de la sociedad en lo referente a la ecología y la protección al ambiente.

IV. VIOLENCIA, ESTABILIDAD Y LEGITIMIDAD EN MÉXICO

1. El relato de la historia convulsa y turbulenta de buena parte del siglo XIX³¹, desde los inicios de la Independencia (15 de septiembre de 1810), ha relacionado cambio social con violencia, aun en los momentos de pacificación precaria en algunas regiones del país; a tal grado la violencia y la lucha armada fueron un hecho social evidente —«...hipótesis causal particularmente evidente...»—³² que aun los juristas cuando describen la historia³³ de nuestras leyes fundamentales no pueden dejar a un lado las vicisitudes e incertidumbres en que éstas

³⁰ Al respecto véase la reacción en contra del Poder Ejecutivo Federal, manifestada por Warren Christopher, Secretario de Estado en la Reunión Cumbre de las Américas, Miami, Florida. Programa de Noticias, ECO, Canal 6 de T.V., sábado 11 de diciembre de 1994, México, D.F.

³¹ Leal, Juan Felipe, «El Siglo XIX Mexicano. El Estado y las Clases Sociales: 1821-1854», (bibliografía comentada en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas*, no. 70, octubre-diciembre de 1972, Ed. UNAM, 1973, pp.5-24 en que se analiza una bibliografía dividida por temas y subtemas que incluye varios cientos de publicaciones).

³² Weber, M., *op.cit.*, p.9.

³³ Tena Ramírez, Felipe, *Leyes Fundamentales de México*, Ed. Porrúa, México, 1971.

se formalizaron, daré sólo dos ejemplos: la Constitución de Apatzingán (1814) sin vigencia jurídica es Morelos y su revolución de independencia en el sur; la Constitución de 1857 es el enfrentamiento entre dos fracciones irreconciliables: liberales vs. conservadores ³⁴.

De igual forma se originó el movimiento revolucionario del 20 de noviembre de 1910, violencia y acontecimientos guerreros que adquirieron mayor intensidad tras el asesinato del Presidente Madero (21

³⁴ Zarco, Francisco, **Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857)**, Ed. Colegio de México, México, 1956.

Véase: discusiones de las sesiones de 29 de julio al 7 de agosto de 1856, pp.548 a 690, referentes al artículo 15 del Proyecto de Constitución: «No se expedirá en la República ninguna ley, ni orden de autoridad, que prohíba o impida el ejercicio de ningún culto religioso, pero habiendo sido la religión exclusiva del pueblo mexicano la católica, apostólica, romana, el Congreso de la Unión cuidará, por medio de leyes justas y prudentes, de protegerla en cuanto no se perjudiquen los intereses del pueblo, ni los derechos de la soberanía nacional», mismo que por votación del 26 de enero de 1857, por 57 votos contra 22, se retiró del Proyecto de Constitución, pp.1220 y 1419; en las que intervinieron los diputados: Marcelino Castañeda, José María Mata, José Antonio Gamboa, José María Velasco, Francisco Zarco, José María Cortés y Esparza, Rafael González Páez, (La Rosa, Ministro de Relaciones Exteriores), Rafael Jaquéz, Miguel Buenrostro, Mariano Arizcorreta, Prisciliano Díaz González, Juan N. Cergueda, Juan Antonio Fuentes Villalobos, Juan Bautista Barragán, Ignacio Ramírez, Vicente López, José María La Fragua, Juan de Dios Arias, Santos Degollado, Eligio Muñoz, Francisco García Arriaga, Isidoro Olvera, Guillermo Prieto, Francisco de P. Cendejas, Antonio Escudero, Antonio Aguado, Pedro Ampudia, Ponciano Arriaga (Montes, Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos).

Ramírez, Ignacio, **México en Pos de la Libertad**, véase: Operación pronunciada el 5 de febrero de 1863, Ed. Partido Revolucionario Institucional, México, 1986, pp.90-96.

Altamirano, Ignacio, **Historia y Política de México 1821-1882**, Ed. Partido Revolucionario Institucional, México, 1985.

Vigil, José María, **La Reforma**, Tomo IV (1855-1861) de resumen integral de... **op.cit.**

Sierra, Justo, «Evolución Política del Pueblo Mexicano», en **Obras Completas**, Tomo XII, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México 1977.

Cosío Villegas, Daniel, **Historia Moderna de México. La República Restaurada**, Ed. Hermes, México, 1955. *Vid.* Primera Parte: Herencias y Legados, pp.45-110.

Roeder, Ralph, **Juárez y su México**, Dos tomos, Ed. Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, México, 1958.

Reyes Heróles, Jesús, **El Liberalismo Mexicano en Pocas Páginas**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

Villegas, Abelardo, **México en el Horizonte Liberal**, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1981.

Lira, Andrés, **Espejo de Discordias. Lorenzo de Zavala-José María Luis Mora-Lucas Alamán**, Ed. Secretaría de Educación Pública, México, 1984.

de febrero de 1913) y llegaron a expresiones inusitadas en el enfrentamiento religioso de la Guerra Cristera de 1926-1929³⁵.

2. Ésta es, entre otras, la razón por la cual pacificar al país se consideró un valor social prioritario, como medida elemental de seguridad física frente al temor de morir violentamente a manos de un enemigo no identificado militar, social e históricamente, personaje indeterminado que el ingenio popular en corridos y cantares identificó como «la bola», a diferencia de lo que sucedió entre señores feudales³⁶ y estados nacionales, en sus respectivas épocas.

3. La pacificación del país tras dos décadas (1910-1929) de temor y miedo se convirtió en un anhelo social de *estabilidad* independiente de clases, estratos y condiciones sociales diferentes y aun contrarias, que a partir de la consolidación del gobierno de los caudillos triunfantes se relacionó con la idea política del poder institucionalizado, la máxima sería: ¡Pacificar para *estabilizar*!

4. La revolución de 1910 a 1929, como todo enfrentamiento armado en un país subdesarrollado, se identificó con sus caudillos y sus áreas geográficas de influencia. La importancia y destino de la multitud de caudillos menores, regionales y locales, dependió del éxito o fracaso del caudillo (Orozco, Villa, Zapata, Obregón, etcétera), del grupo o del movimiento (maderistas, convencionistas, constitucionistas, etcétera) al que se afiliaron, la mayoría de las veces determinado por circunstancias geográficas militares y otras, más difíciles de encontrar, por una identificación con principios e ideales políticos revolucionarios³⁷, aunque éstos se presentasen en modelos poco precisos (anhelos), frecuentemente con un sustento populista, libertario

³⁵ Meyer, Jean, **La Cristiada**, dos tomos, Ed. Siglo XXI, México, 1977.

³⁶ Maquiavelo, Nicolás, citado por Jürgen Habermas, en **Teoría y Praxis**, Ed. Sur, Buenos Aires, 1966, p.19.

³⁷ González Ramírez, Manuel, «La Revolución y el Sentido de los Planes», en **Planes Políticos y Otros Documentos**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1954, p.VI y ss.

y/o anarquista ³⁸, propio de ideologías emotivas, poco elaboradas teóricamente.

5. Mucho se ha escrito sobre la Revolución, sus caudillos y sus grupos y movimientos ³⁹; lo que es un hecho histórico es que el grupo constitucionalista (**Diario de los Debates**) logró imponer un modelo de unidad nacional para la *estabilidad*: el de la Ley Fundamental-Constitución de 1917.

6. La *pacificación* del país por la vía institucional precaria fue convirtiéndose en realidad al centralizarse el poder guerrero-militar y permitir la emisión de una convocatoria semiformal en el Informe de Gobierno de Plutarco Elías Calles al Congreso de la Unión el 1° de septiembre de 1928, tendiente a unir a los grupos triunfantes con niveles jerárquicos diversos a través de un partido revolucionario, lo que se logró en marzo de 1929 con el Partido Nacional Revolucionario –PNR– y en tono a un régimen presidencialista que ofrecía *estabilidad* política, cuya regla de identidad original fue encauzar la lucha por el poder dentro de controles políticos circunstanciales y flexibles, pero eficaces.

7. El gobierno revolucionario se institucionalizó con el apoyo «militar», al organizar un ejército regular (Obregón-Amaro, 1923) que cubrió el territorio nacional y cuya capacidad guerrera fue superior a las «caudillescas» que enfrentaron, convirtiendo al alzado en un enemigo político-militar de un sistema precario en proceso de gestación de un gobierno nacional; son los casos de Adolfo de la

³⁸ Flores Magón, Ricardo, **Tribuna Roja**, Tomo III, Ed. Ediciones del Grupo Cultural «Ricardo Flores Magón», México, 1921.

Cockcroft, James, **Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana**, Ed. XXI, Siglo Veintiuno Editores, México, 1971. Véanse Segunda Parte: «Los Intelectuales como Precursores 1900-1910», pp.87-160; y Tercera Parte: «Los Intelectuales como Revolucionarios 1910-1917», p.161 y ss.

³⁹ Brading, D.A. (coordinador), **Caudillos y Campesinos en la Revolución Mexicana**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

Katz, Friedrich, (compilador), **Revuelta, Rebelión y Revolución**, Ed. Ediciones ERA, México, 1968.

Huerta vs. Obregón en 1923; Escobar, Aguirre y Manzo vs. Almazán y Cárdenas en 1929.

8. En este proceso primero fue:

- a) La fuerza guerrera de grupos y movimientos encabezados por caudillos, que logró acuerdos, pactos y alianzas a nivel nacional con «los constitucionalistas»; después,
- b) el gobierno militar con capacidad suficiente para imponer la paz y la unidad; y posteriormente,
- c) la creación de un partido revolucionario.

Proceso diferente al legitimador de la estabilidad en los sistemas políticos democrático-liberales.

9. En este proceso de *pacificación* una función prioritaria fue lograr la *estabilidad* del gobierno, implantada y sostenida mediante la fuerza militar superior del ejército regular-nacional y su rápido fortalecimiento de 1923 a 1945⁴⁰. En 1940 el sector militar encauzado en la profesionalización salió del Partido de la Revolución Mexicana –PRM, fundado en 1937, y para 1946, fecha de fundación de Partido Revolucionario Institucional –PRI–, la función del Ejército y el papel propio de los militares estaban acotados fuera del partido en el Gobierno.

10. La *estabilidad* como hecho sociológico-político se ha querido simplificar y entender casi como un proceso natural, cuando en la práctica, como toda acción incorporada a un proceso disociativo-conflictivo, exigió una participación política sin precedente, sobre todo si se toma en cuenta la fuerza real del movimiento popular en que se dio, producto del enfrentamiento durante dos décadas entre

⁴⁰ Lozoya, Jorge Alberto, **El Ejército Mexicano** (1911-1965), Ed. Colegio de México, 1970, pp.45-70.

caudillos y grupos armados que provocó y propició violencia y muerte ⁴¹, implantando la inseguridad física y la incertidumbre de la propiedad (bienes muebles e inmuebles) sobre todo en las zonas afectadas por la lucha armada.

11. El gobierno como régimen político precario (1920-1930), se legitimó socialmente en el logro de la *estabilidad* constitucional (legitimidad), poniendo como regla de identidad del grupo gobernante y aceptada por los gobernados, el mantenimiento de la seguridad interna (paz y orden públicos), normalmente a través de la persuasión y excepcionalmente con el uso del aparato represivo, como en el caso de Saturnino Cedillo (1939) ⁴².

12. El grupo gobernante (PNR, PRM, PRI) durante seis décadas (1920-1980) se identificó con el grupo triunfante de un movimiento social revolucionario-armado, que le sirvió para que se reconociese su origen popular-democrático y su calidad de portador de los ideales y creencias formalizadas en la Ley Fundamental-Constitución (legitimidad) de 1917.

13. En el proceso de *pacificación*, institucionalización y *estabilidad* política, las fuerzas armadas (ejército) jugaron un papel determinante. Estas reglas de identidad-revolucionaria de los gobernantes no tienen mucho en común con las reglas ortodoxas de identidad y de reconocimiento de los gobiernos democráticos-liberales-pluripartidistas.

⁴¹ «La Revolución apenas si tiene ideas. Es un estallido de la realidad; una revuelta y una comunión, un trasegar viejas sustancias dormidas, un salir al aire muchas ferocidades, muchas ternuras y muchas finuras ocultas por el miedo a ser. ¿Y con quién comulga México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atreve a ser. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano borracho de sí mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, a otro mexicano». Paz, Octavio, **El Laberinto de la Soledad**, Fondo de Cultura Económica, México, 1981, p.153.

⁴² Cárdenas, Lázaro, **Obras I. Apuntes 1913-1940**, Ed. Universidad Autónoma de México, México, D.F., 1986, p.406.

14. La Revolución Mexicana de 1910 a 1929 poco tuvo que ver con los movimientos democráticos-liberales-individualistas del siglo XIX. Fue más bien un movimiento libertario-armado en aras de un bienestar colectivo, en algunos casos con características y tendencias comunales, como la asignada oficialmente al zapatismo, supuestamente existente en un pasado de comunidades-económicas indígenas libres y justas (Plan de Ayala). Hecho social difícil de probar sociológicamente, pero lo cual tratan de hacer algunos científicos sociales que parten de la hipótesis de que aún subsiste una vigencia social de la propiedad comunal que rechaza a la privada, en regiones del país con orígenes e influencias indígenas, no sólo en zonas marginadas y semimarginadas sino en zonas rurales integradas, algunas de ellas localizadas en la periferia de la ciudad de México⁴³.

15. La Revolución y su afán por lograr una *justicia social* estructural y/o particularizada o individualizada, es el caso de las parcelas ejidales⁴⁴; poco tiene en común con las teorías socialistas-comunistas que se enfrentaron al capitalismo-industrial temprano de principios del siglo XIX, basado en la explotación de los asalariados; aún en las regiones mineras y textiles, cuyos brotes de reclamos obreros se han magnificado como causas internas del movimiento armado contra la dictadura de Porfirio Díaz, son los casos de Cananea (1906) y Río Blanco (1907).

16. Las reglas de identidad del Gobierno de la Revolución, derivadas de la de reconocimiento, como propósito de hacer realidad la Ley Fundamental-Constitución (legitimidad), se origina en la paz pública-social, en la no guerra y en el camino hacia su *estabilización institucional*. El afán por lograr el orden mediante la formalización de la Ley Fundamental-Constitución, es recurrente aunque fallido en los internos liberales y conservadores del siglo XIX. Orden que permita

⁴³ Diálogo con Margarita Menegus, 1994.

⁴⁴ Silva Herzog, Jesús, **El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1959. Véase Capítulo VIII y ss., p.280 y ss.

la convivencia o por lo menos la sobrevivencia de los individuos y el respeto a sus bienes de origen legal.

16.1 La idea legitimadora de la democracia liberal del siglo XIX de que la norma jurídica cambia estructuralmente a las realidades sociales, tras décadas de intentos fallidos no produjo amargura entre los grupos gobernantes emergentes sobre la viabilidad de un país estable y moderno, debido a que los afanes democratizadores formalistas giraron en torno al eje de lograr un gobierno capaz de mantener *la paz y el orden públicos* a nivel nacional y local, aunque fuese a través de medios rígidos y estrictos. Lograr el orden fue ansia de liberales y conservadores: recordemos el ofrecimiento y aceptación condicionada del imperio mexicano por un príncipe extranjero en el Castillo de Miramar en 1863⁴⁵.

16.2 La invasión francesa y el Imperio de Maximiliano (1864) agravaron la situación del estado de guerra, como temor de morir violentamente a manos de un enemigo, en este caso identificado, por lo menos en lo que se refería a oficiales y tropa extranjeros.

16.3 Después del triunfo nacionalista, finiquitado en el Cerro de las Campanas (1867), los grupos guerreros liberales, otrora unidos en la defensa de la soberanía nacional, manifestaron bélicamente su deseo y afán político de llegar al gobierno mediante golpes de fuerza: los medios y los argumentos fueron múltiples; son los casos de Tuxtepec y Palo Alto, Oaxaca (1876), a favor del General Díaz.

16.4 Porfirio Díaz tomó el poder y durante más de tres décadas (1876-1911) su capacidad guerrera-política logró imponer como regla de identidad prioritaria del Gobierno el *orden y la paz pública-social*, la no guerra, la no muerte violenta a manos de un enemigo difuso y cambiante pero constante.

⁴⁵ Tena Ramírez, Felipe, **op.cit.**, p.669.

16.5 Durante dos décadas, de 1880 a 1900, al *orden impuesto* «máталos en caliente» (1879) se unió la idea del progreso en la concepción positivista de desarrollo económico como resultado fructífero de la aplicación de la razón científica-positivista⁴⁶, diferente a las ideas metafísicas de la ilustración y la enciclopedia que tuvieron influencia en algunos próceres y constitucionalistas de nuestra Independencia (1821-1824).

16.6 Porfirio Díaz y el grupo de los «científicos» le dio a la *paz social* y a la *seguridad pública* la dimensión de «orden para el progreso», el cual se intentó en la agricultura a través del modelo liberal-económico que había «quitado» personalidad jurídica a las corporaciones religiosas y civiles, con la idea de incorporar sus bienes al proceso capitalista de producción agropecuaria y libre mercado, que no se dieron en la práctica. Por ello su regla de reconocimiento: aplicar la Ley Fundamental-Constitución reformada de 1857 (legitimidad), fue diluyéndose aun dentro de la propia élite y las clases medias emergentes, quitándole a la primera una de sus reglas de identidad más importantes.

El *orden social* y la *estabilidad* del gobierno generaron progreso, pero acrecentaron las desigualdades e hicieron obvia la explotación; ejemplo de ello son los peones acasillados, endeudados e insolventes en y con haciendas improductivas y sin programa de desarrollo capitalista viable. Esto evitó un cambio dentro del sistema e impuso y recrudeció, en los momentos críticos, el ejercicio de la violencia y la fuerza, incluyendo la coactiva-jurídica, generando contradicciones y acentuando su ineficacia en la solución de los conflictos.

A esta frustración de la élite se suma su falta de movilidad, que desembocó en un enfrentamiento generacional entre nietos y abuelos⁴⁷ donde la generación de los padres había sido nulificada.

⁴⁶ Comte, Augusto, **Ensayo de un Sistema de Política Positiva**, Ed. UNAM, México, 1979.

⁴⁷ Plática con Javier Garcíaadiego, 1993.

Los vientos de cambio del siglo XX no fueron captados por una élite de viejos que habían aprendido y sabido mandar en la violencia y el desorden, pero quienes consideraron que la *estabilidad* lograda era suficiente para mantener la regla de reconocimiento del sistema y las de identidad de los gobernantes.

17. Regresando al siglo XX, desde 1929 el gobierno impuso como regla de identidad del régimen nuevamente la *paz social* y el *orden público*, tendientes a la *estabilidad* del gobierno que buscó su legitimidad y su regla de reconocimiento en la aplicación de la Ley Fundamental-Constitución de 1917, entendida como un modelo de cambio formalmente vigente, no utópico, aunque muchos así lo consideren, debido a que la propiedad inmueble –tierra y subsuelo– de la Nación en los términos del artículo 27 constitucional era considerable cuantitativa y cualitativamente, pues incluía los latifundios y las transacciones indebidas hechas por liberales y porfiristas en la aplicación de la Ley de Reforma sobre la Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Religiosas de 1856 ⁴⁸ «y demás leyes y disposiciones relativas» (fracciones VII, IX y XIII, entre otras), posteriormente el petróleo (1938) y la energía eléctrica (1960).

18. El precepto propiedad originaria de la Nación en materia agraria fue ejecutado mediante actos unilaterales de voluntad por su representante legal (Derecho Unidimensional), el Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo Federal, desde los inicios de la institucionalización de la Revolución.

Las prácticas y criterios administrativos de considerar al Ejecutivo Federal como representante (legal) de la Nación han sido confirmados en algunas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁴⁸ Bazant, Jan, **Los Bienes de la Iglesia en México 1856-1875**, Ed. Colegio de México, México, 1984.

Leyes de Reforma. Ed. Empresas Editoriales, S.A. México, 1955.

ENSAYO SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA EN MÉXICO (FUNCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO)

«a) Ejecutivo Federal. Tiene un doble carácter: como *representante* de la persona moral que se llama *Nación*, o sea de la *Federación Mexicana*, y como *representante* de uno de los tres *Poderes* en que el pueblo deposita su soberanía.

»Juicio sumario contra la Secretaría de Agricultura y Fomento, Compañía Constructora Richardson, S.A., 23 de enero de 1922.

»b) El artículo 27 constitucional, al hablar de la *Nación*, se refiere a la *Federación* constituida por las partes que la integran, y no a los Estados, pues no pudo confundir el interés del país, con el de uno de sus componentes; y además los Estados no son los órganos constitucionales por medio de los cuales expresa su voluntad la *Nación*.

»Amparo civil en revisión, Carlos Robles, 17 de mayo de 1929.

»c) Las legislaturas de los Estados carecen de facultades para expedir leyes que impongan modalidades a la *propiedad privada*, porque esto *corresponde a la Nación*, representada por el Gobierno Federal.

»Amparo administrativo en revisión, Manuel López Burgos y Hermanos, 13 de septiembre de 1930.

»d) La *Nación* no puede ser confundida con una Entidad Federativa y los funcionarios de un Estado no son, por consiguiente, los que *representan* a la *Nación*, que es única y que está representada por sus *órganos federales*.

»Amparo administrativo en revisión, Manuel Iturriaga, 26 de marzo de 1935»⁴⁹.

19. La *estabilidad* del sistema político mexicano busca volver realidad el Proyecto de Nación formalizado en la Ley Fundamental-Constitución (legitimidad). Mantener con técnicas políticas el orden y la paz públicos son medios para lograr el desarrollo con justicia social particularizada del país.

20. La *estabilidad* para el desarrollo económico-social se consideró como regla de reconocimiento del gobierno, que tuvo vigencia

⁴⁹ **Diccionario Jurídico Mexicano**, 4 tomos, Ed. Porrúa-UNAM, México, 1991, p. 2172.

hasta entrada la década de los sesenta en que los vientos renovadores de la democracia electoral pluripartidista (1964) fueron impelidos por iniciativas del Poder Ejecutivo que reformaron la Constitución y las leyes respectivas.

21. Reforma política electoral que se ha vuelto una constante en los últimos lustros ⁵⁰ y se presenta, en algunos casos (1994), como un enjuiciamiento de la regla de reconocimiento del sistema y a las reglas de identidad del grupo gobernante. Las tesis de que la *estabilidad* y el anhelo de justicia social eran suficientes para reconocer al sistema como legítimo (Ley Fundamental-Constitución) e identificar a sus gobernantes como buenos ha disminuido y el enjuiciamiento negativo tiende a aumentar.

22. La tesis de que en 1910 se agoraron:

- a) la legitimidad (Ley Fundamental-Constitución reformada de 1857);
- b) la regla de reconocimiento del régimen (gobierno) político; y
- c) las reglas de identidad al grupo gobernante.

En 1994 se parafrasea por quienes consideran que tienden a agotarse:

- a) la legitimidad (Ley Fundamental-Constitución reformada de 1917);
- b) la regla de reconocimiento del régimen (gobierno) político; y
- c) las reglas de identidad del grupo gobernante vinculadas a la estabilidad del sistema político sin represiones frecuentes.

Debido a que —al igual que en 1910— no se ha logrado el desarrollo económico con igualdad y movilidad sociales.

23. La regla de identidad de los gobernantes basada en su origen revolucionario no tiene ya sentido en un país donde el porcentaje más alto de la población es joven. Los mismos gobernantes priístas (1992)

⁵⁰ Rebolledo, Juan, «El Sistema Electoral en México», en **México, 75 Años de Revolución. La Política**, tomo 2, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1988, p.383 y ss.

consideran inapropiado explicar el ejercicio de su poder en los movimientos armados de 1910-1939.

24. El PRI desde su origen (PNR, 1929) hasta entrada la década de los ochenta se explicó y justificó como un extenso y pesado organismo cuyos nervios (comités) recorrían toda la desestructurada sociedad y las regiones comunitarias del país, jugando importantes funciones de *control político* no represivo, como son:

- a) La de participación política de apoyo masivo-sectorial-popular al Poder Ejecutivo;
- b) La de promoción y captación de votos ciudadanos individuales, real o formalmente sectorizados: campesinos, CNC; obreros CTM-CT; sector popular, Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, etcétera. A esta actividad los dirigentes de los sectores han denominado voto organización o voto fuerte ⁵¹;
- c) La de control político sustentado en el trámite o gestoría de justicia social particularizada, es el caso de las parcelas ejidales en los repartos agrarios vinculados a la propiedad inmueble-raíz de la Nación, a través de organizaciones agrarias de campesinos o agropecuarias de pequeños propietarios;
- d) La de control político-legal de las organizaciones obreras a través de sus líderes, sustentada en la titularidad sindical de los derechos colectivos del trabajo; y
- e) La de control político sustentada en el trámite o gestoría de justicia social particularizada (títulos de propiedad) de los integrantes de los sectores y grupos de precaristas y colonos en las áreas marginadas y semi-marginadas en las zonas urbanas y suburbanas.

En 1994 estas funciones explicativas y justificadores de la clase política tradicional (dinosaurios) ya no son útiles debido a que:

⁵¹ Diálogos con Mariano Palacios Alcocer, Secretario General del Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, en otoño de 1994.

- a) La participación política masiva es propia de grupos y sectores marginados cuya presencia física prueba el subdesarrollo económico capitalista y político electoral y la marginación social.
- b) El voto ciudadano captado o inducido sectorialmente contraría la libertad de conciencia de quien lo emite, invalidándolo en los términos de la democracia individualista.
- c) El control político prebendario agrario es contrario a la modernización económica sustentada en la certidumbre jurídica de la propiedad y de los derechos y obligaciones de los propietarios. (C.P., artículo 27, fracción VIII).
- d) El control político legal sindical (cláusula de exclusión)⁵² contraría el fundamento de la representación gremial no enjuiciada del sector obrero en los órganos de concertación consensada, como ha sido en los pactos económicos a partir de 1987.
- e) El control político de marginados urbanos y suburbanos se considera que fue o debe ser efímero, pues la certidumbre jurídica de los títulos de propiedad emitidos por la autoridad competente y entregados por el Presidente de la República en forma masiva durante 1994 terminó con el precarismo de los posesionarios de bienes raíces en esas zonas.

25. La Ley Fundamental-Constitución que legitima y da regla de reconocimiento al sistema político implica la construcción de una Nación, lo que no es posible sin un principio de identidad nacional.

26. En torno al nacionalismo la estabilidad gira como:

- a) exclusión de la lucha;
- b) integración social; y
- c) represión de quienes buscaron y buscan por la vía armada el cambio.

⁵² Ley Federal del Trabajo, **op.cit.**:

«Artículo 395.- En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión.

»Podrá también establecerse que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante».

27. En las últimas décadas el nacionalismo mexicano (modelo artificialmente creado) se ha puesto en entredicho, considerando que la pluralidad étnica y la diversidad cultural en el territorio nacional no han sido debidamente integradas al proyecto nacional.

Hay quienes lo tildan de radical e impositivo, aun en aquellos casos en que el fin que se persiguió fue considerado y calificado como positivo, dando como ejemplo la política de integración cultural que implicaba el aprendizaje obligatorio del español por los indígenas.

V. LAS FUERZAS ARMADAS Y LA ESTABILIDAD POLÍTICA

1. En este análisis me refiero exclusivamente a la función de las fuerzas armadas (Ejército) en el mantenimiento de la *paz interna* (*orden público* nacional)⁵³.

Como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, cuyo titular es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (C.P. artículo 89).

No a sus funciones de garante de la soberanía nacional frente a fuerzas extranjeras, ni al cuidado de la misma en las zonas fronterizas.

2. El papel de las Fuerzas Armadas (Ejército) ha sido determinante durante más de seis décadas la para *estabilidad* del sistema político: primero desplazó y avasalló a caudillos y grupos violentos; después controló y sometió esporádicamente a grupos y movimientos subversivos; mencionaré cuatro casos: el movimiento ferrocarrilero, 1958; el movimiento estudiantil, 1968; la guerrilla rural en Morelos y Guerrero, 1970-1973, y el levantamiento en los Altos y periferia de la selva de Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, 1994; y posteriormente y de mayor importancia

⁵³ *Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos*, Ed. Secretaría de la Defensa Nacional, México, 1986.

por ser permanente su presencia como garantes de la seguridad nacional y la integridad de la República, cuyos miembros, soldados profesionales, especialmente sus altos mandos, han mostrado *lealtad* y *eficacia* en el cumplimiento de las misiones que les encomiendan las leyes.

Los caciques locales y regionales y los grupos subversivos sabían y saben (Subcomandante Marcos, EZLN⁵⁴ que las Fuerzas Armadas son institucionales y obedecen a su Comandante Supremo, el Presidente de la República.

3. Las Fuerzas Armadas (Ejército) han jugado un papel importante en este proceso de integración social (nacionalista), al lograr con su participación establecer y fortalecer la *estabilidad* del sistema político como regla de reconocimiento y de identidad de los gobernantes, mediante acciones eficaces no represivas, aunque en casos excepcionales lo hayan sido. Para los lectores extranjeros hay que subrayar que se trata de un proceso de integración que no tiene nada que ver ni en su origen ni en su desarrollo con un régimen fascista⁵⁵.

4. Las Fuerzas Armadas (Ejército) son dependencias del Poder Ejecutivo Federal en las cuales la modernización del aparato burocrático es un hecho evidente que debe ser estudiado a nivel científico. En su origen fue dirigido por jefes ajenos a la educación militar y con el paso del tiempo se ha convertido en una institución mandada por militares profesionales donde los papeles de sus actores, incluyendo los de más alta jerarquía, están determinados por las funciones (competencia y jurisdicción) encomendadas a la Institución, en las leyes y en las órdenes de su Comandante Supremo, el Presidente de la República.

5. Las Fuerzas Armadas se organizan y estructuran con criterios de racionalidad en el sentido de la administración moderna, instaurando

⁵⁴ Subcomandante Marcos del EZLN, Conferencia de prensa, **Revista Proceso**, no. 945, México, 12 de diciembre de 1994.

⁵⁵ Marcuse, Herbert, **Cultura y Sociedad**, Ed. Sur, Buenos Aires, 1967, p.7.

como canales de movilidad ascendente de sus miembros, el esfuerzo personal que implica la capacitación y el talento cultivado, como puede observarse en el desarrollo de sus centros de educación básica, media y superior.

6. A finales del siglo XX la *estabilidad política*, el nacionalismo como afán de *integración social* y el *desarrollo económico* incipiente ya no son considerados como suficientes para reconocer e identificar al sistema político como democrático, ni a los gobernantes como «buenos» o «funcionales» por haber logrado la *estabilidad* e intentado el desarrollo económico con justicia social. Entre otras razones debido a que se considera que la estabilidad está en manos de una institución profesional, las Fuerzas Armadas, cuya eficacia y eficiencia de sus actores (militares de carrera) se mide por su capacidad para contener todo intento de desestabilización social-política. Esto explica el tratamiento que su Comandante Supremo, el Presidente de la República, le ha dado al levantamiento armado de enero de 1994⁵⁶ en los Altos y la periferia de la selva de Chiapas⁵⁷.

VI. LAS FUERZAS ARMADAS COMO COADYUVANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. El gobierno (Poder Ejecutivo Federal) durante décadas ha encomendado a sus Fuerzas Armadas (Ejército profesional) los quehaceres militares para mantener la *paz social*, que incluyen, excepcionalmente, acciones coadyuvantes con el Ministerio Público para sofocar acciones tipificadas como delitos.

⁵⁶ Salinas de Gortari, Carlos, **Cese de toda iniciativa de fuego** (Secretaría de la Defensa Nacional, boletín de prensa no. 27, enero 31 de 1994); **Nombramiento de un Comisionado para la Paz sin Competencia ni Jurisdicción** (enero de 1994); **Ley de Amnistía** del 1 al 16 de enero de 1994.

⁵⁷ Zedillo, Ernesto, **Discurso de Protesta como Presidente Constitucional**, del 1° de diciembre de 1994, en que reitera la orden de cese de toda iniciativa de fuego; propuesta al Congreso de la Unión para integrar una comisión para la paz pluripartidista del 14 de enero de 1994.

2. Hay quienes consideran que el narcotráfico, calificado como asociación delictuosa responsable de varios ilícitos graves, por el poder económico que representa y su capacidad corruptora, no sólo es un problema de orden y seguridad públicos sino, debido a sus dimensiones un problema de seguridad nacional que debe ser atendido y solucionado con la participación de las Fuerzas Armadas. Distinguir un problema de orden y seguridad públicos, por grave que sea, de un problema de seguridad nacional exige prudencia, cautela y conocimientos jurídicos y militares para calificar y prevenir los efectos políticos y sociales negativos que pueda generar.

3. El poder del narcotráfico y su capacidad de corrupción han sido estudiados en forma sistemática, ampliamente divulgados como un peligro para la tranquilidad social y política. En la «guerra» que le declaró en enero de 1993 el Procurador General de la República⁵⁸, la participación del gobierno se encomendó al Ministerio Público y a la Policía Judicial a su mando, es decir, como una acción persecutoria de delitos y delincuentes peligrosos organizados que cometen delitos graves, los propios del narcotráfico contra la salud y, entre otros, los que se relacionan con el tráfico y contrabando de armas, sobre todo de aquellas que por sus características técnicas son marcadamente superiores a las que utilizan los cuerpos de policía.

VII. HIPÓTESIS Y REFLEXIONES SOBRE LA ESTABILIDAD EN EL FUTURO INMEDIATO (1995)

1. En el proceso de cambio tendiente a acelerar la modernización con estabilidad (progreso y paz social) planteado por el Presidente de la República 1994-2000)⁵⁹, las medidas técnicas y políticas que se

⁵⁸ Carpizo, Jorge, Diario **El Día**, México, D.F., enero de 1993.

⁵⁹ Zedillo, Ernesto, «Mensaje en la Protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos», 1º de diciembre de 1994, en Periódico **El Día**, Suplemento Especial, México, D.F., 2 de diciembre de 1994.

decidan generarán conflictos en el futuro inmediato, especialmente políticas de ajuste, al afectar intereses de personas, grupos y sectores que han sido y serán desplazados de los escenarios del gobierno (poder formal), por lo que «(...) la confianza en el patriotismo, la lealtad institucional y la eficacia de las fuerzas armadas»⁶⁰, será un factor importante en el ritmo que se les dé, de manera especial en cuatro espacios:

- a) El de la no inclusión de un porcentaje alto de políticos priístas con militancia activa añeja, en los altos puestos de la Administración Pública, en diciembre de 1994.
- b) El del adelgazamiento del Partido Revolucionario Institucional –PRI– y su desvinculación del gobierno, especialmente del Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo;
- c) El de la reducción del poder (ámbitos de competencia) del presidencialismo; y
- d) El de la Transferencia de competencias legislativas del Congreso de la Unión a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, modificando la dinámica constitucional del artículo 73, iniciada en 1921.

2. En las últimas décadas el PRI ha dejado de ser un partido hegemónico en el gobierno, cediendo cada vez más espacios en el Poder Ejecutivo Federal a grupos y personas ajenos a su militancia activa, sobre todo de carácter electoral, quienes se han incorporado al gobierno por sus calificaciones técnicas y profesionales; son los casos de los Presidentes de la República de 1958 a 1964 y de 1970 al año 2000; lo mismo ha sucedido en las Cámaras del Congreso de la Unión, aunque en menor medida.

Por otra parte, en aras de la pluralidad partidista se han reducido lugares en la Cámara de Diputados a la representación proporcional

⁶⁰ Cervantes Aguirre, Enrique, «No Somos Fuerza Armada de Agresión», Periódico **El Día**, México, D.F., 4 de diciembre de 1994, p.9.

del PRI al derogarse la llamada cláusula de gobernabilidad; asimismo se garantiza en la de Senadores en una cuarta parte de los escaños a la primera oposición en las 32 Entidades Federativas ⁶¹, lo que ha dado una nueva dinámica a los partidos de oposición.

3. La dinámica de la modernización neoinstitucional ha excluido o no ha admitido el ingreso a los altos puestos en los órganos de gobierno del Poder Ejecutivo y en menor medida del Legislativo a quienes carecen de calificación profesional alta y/o de excelencia, desplazando con ello a líderes de sectores políticos-sociales mayoritarios, cuyos votos organización (voto fuerte) determinaron durante décadas los resultados de las elecciones e influyeron claramente en los resultados electorales de 1994.

4. El grupo gobernante técnico-profesional calificado ha decidido modificar sus reglas de identidad mediante el voto mayoritario, al separarse del partido que lo llevó al gobierno. Puede suponerse que en alguna medida esta decisión ha sido tomada debido a que la *estabilidad del sistema político* se considera fuera de riesgo por la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas y la disciplina personal de los militares de carrera que actúan en sus órganos de alto mando y sus mandos superiores.

5. La dirigencia del PRI tradicional, de control político y prebendas, derivada de bienes propiedad de la Nación, al ser desplazados o alejarse por voluntad propia [de esta práctica] seguramente se reflejarán en los procesos electorales futuros.

6. Si se parte de la hipótesis de que el subdesarrollo económico condiciona los comportamientos políticos semidemocráticos a la eficacia o aun a las expectativas de éxito de los partidos, organizaciones y líderes que realizan gestorías, se entiende por qué esta función en

⁶¹ Nuñez, Jiménez, Arturo, **La Reforma electoral Mexicana de 1989-1990**, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p.383 y ss.

los últimos años (1988-1994) se desplazó hacia órganos de gobierno; es el caso del Programa de Solidaridad, mutuación que ofrece dificultades teóricas, técnicas y prácticas de explicación dentro de los marcos teóricos de los procesos políticos de modernización democrática plena.

7. En el futuro inmediato la gestoría eficaz puede ser función de nuevas organizaciones y/o partidos, abriendo nuevos espacios de participación política, lo que puede traer como consecuencia el cambio del comportamiento de los ciudadanos en relación al llamado voto fuerte-sectorial u organización. Lo importante para la modernización política es que pierda su carácter masivo o sectorial marginado y su origen prebendario o de gestoría de derechos derivados de posesiones precarias.

8. En el análisis de las expectativas del comportamiento social político de los grupos y sectores mayoritarios del país no puede olvidarse su origen social de carácter prebendario y de precarismo jurídico, características que no responden a los incentivos de la participación política libre y consciente de ciudadanos integrados legalmente al sistema de producción capitalista en el marco de instituciones liberales-sociales.

9. Los *controles políticos* realizados por los nervios (comités y líderes reales, locales, municipales y regionales), del partido del gobierno al alejarse de éste, especialmente del Poder Ejecutivo (presidencialismo) se reducirán y aun pueden generar efectos negativos en la medida en que su capacidad de gestoría-prebendaria-precaria de derechos difusos se vuelva ineficaz y tienda a diluirse.

10. Los *controles políticos* de origen prebendario o precarista se desvanecen, sin generar conflictos contestatarios y violentos propios de grupos marginados, con el impacto del desarrollo económico que debe estimular la generación y fortalecimiento de organizaciones sociales que se institucionalicen al paso del tiempo, convirtiéndolas en organizaciones propias de la sociedad civil para las cuales el orden

y la paz sociales son funciones y fines prioritarios, alejándose de controles políticos forzados. La sociedad civil tiene presencia como mecanismo de control social eficaz sin necesidad de recurrir a la coacción, función cuyo monopolio deja a los órganos del estado y no a la violencia desestabilizadora o transgresora de la ley.

11. El pluralismo ideológico y la tolerancia en la ejecución de políticas prácticas dirigidas a sectores sociales y/o comunitarios hundidos en la pobreza extrema, es difícil que se den en el marco de la participación política democrática liberal, consecuencia de su débil presencia entre los intereses prioritarios del sistema de producción y de la estructura del poder real.

12. Puede partirse de la hipótesis que el acceso a la vida democrática liberal-social requiere de la incorporación legal de la fuerza de trabajo rural y urbana marginada y semi-marginada al sistema de producción y sus posibilidades efectivas de movilidad ascendente; o de la hipótesis contraria que considera que la participación política de los ciudadanos marginados puede perfeccionar sus canales democráticos electorales sin la necesidad imperativa o determinante de incorporarse plenamente mediante contratos laborales o actividades mercantiles sancionadas por la ley al sistema de producción capitalista.

13. La modernización del estado neoinstitucional no puede desarrollarse en la actualidad de manera plena mientras persista una sociedad desestructurada o comunitaria aprisionada en el círculo vicioso de la pobreza. La regla de reconocimiento del sistema político que daba al gobierno legitimidad al cumplir o intentar objetivizar la Constitución de 1917, con su quehacer administrativo cotidiano, actualmente, como hemos visto, está en tela de duda, por lo que en el futuro inmediato el nacionalismo integracionista seguirá jugando un papel importante para el mantenimiento de la estabilidad política y la seguridad interior, hoy amenazada localmente, aunque perceptible a nivel nacional por los transgresores marginados del Estado de Chiapas.

14. Las fuerzas armadas jugarán un papel importante como garantes de la seguridad interna (social y orden público). ante el cambio político que separará al partido en el gobierno –PRI– del gobierno, especialmente de los altos puestos del Poder Ejecutivo Federal, Su presencia decidida frente a grupos transgresores, como ha sido el caso en Chiapas y la manifestación pública y cotidiana de la opinión de su alto mando, referentes a su lealtad y disciplina, así como a su nacionalismo, permitirán que los ajustes y contiendas políticas no afecten la seguridad interna.